



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTES	Marta Janneth Granda López
DEMANDADO	Porvenir S.A.
RADICADO	05-001-31-05-002-2020-00096
TEMA	Pensión de Sobrevivientes
DECISIÓN	Confirma sentencia

El dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **214** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia dentro del proceso ordinario promovido por **MARTA JANNETH GRANDA LÓPEZ** contra la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PORVENIR S.A.**, siendo integrando al proceso el señor **LUÍS FERNANDO MOLINA VÁSQUEZ**, con radicado **05-001-31-05-002-2020-00096**.

• **PRETENSIONES:**

La demandante pretende se condene a la accionada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo **JUAN SEBASTIAN MOLINA GRANDA** a partir del 26 de octubre de 2018, junto con las mesadas adicionales que se hubiesen causado y sigan causando, los intereses moratorios o en subsidio la indexación y costas procesales.

• **HECHOS:**

Las anteriores pretensiones las fundamenta manifestando que el 26 de octubre de 2018, falleció por causa de origen común su hijo **JUAN SEBASTIAN MOLINA GRANDA**. Que siempre compartieron como madre e hijo desde su nacimiento hasta la muerte. Que solicitó la pensión de sobrevivientes como la única beneficiaria con derecho, al no tener ingresos propios necesarios para

una vida digna. Que el joven JUAN SEBASTIAN MOLINA le proporcionada todo lo necesario para su subsistencia, como ropa, alimentación, vestuario y medicamentos.

- **CONTESTACIÓN:**

✓ PORVENIR S.A.:

Procedió la parte demandada a darle respuesta a los hechos, señalando que es cierta la fecha de fallecimiento del señor JUAN SEBASTIÁN MOLINA GRANDA. Que se aceptan las circunstancias de convivencia de la madre e hijo, pero que la persona que figura como cabeza de hogar es la hija de la demandante, la señora ALEJANDRA MOLINA GRANDA, quien tiene afiliada en salud a la demandante. Y que es cierto que la demandante elevó solicitud para reclamar la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo, la cual fue negada por la entidad por no acreditar la dependencia económica. Se opuso a todas las pretensiones, y propuso varias excepciones de mérito.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 29 de noviembre de 2021, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, **CONDENÓ** a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la señora MARTA JANNETH GRANDA LÓPEZ, la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo JUAN SEBASTIAN MOLINA GRANDA, en cuantía del salario mínimo legal.

Como argumento de su decisión, señaló que con los testigos traídos al proceso se logró acreditar la dependencia de la madre frente a su hijo, la cual como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no tiene que ser total y absoluta. Señaló que no la dependencia de su hijo no se desvirtúa solo por el hecho de que su otra hija la tuviese afiliada a salud, pues esta es una necesidad básica que tiene la persona. Manifestó que, si bien el afiliado cotizaba al sistema pensional en cuantía de un salario mínimo, esto no quiere decir que éste era el valor real de sus ingresos. Que no esta acreditado en el proceso que la demandante tenga realmente un establecimiento de comercio. Y que las condiciones de vida de la actora cambiaron sustancialmente, ya que tuvo que irse a vivir con su otra hija y su esposo.

CONDENÓ a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la demandante la suma de \$34'644.666 por concepto de retroactivo pensional causado entre el 26 de octubre de 2018 al 30 de noviembre de 2021. Y que, a partir del 1° de diciembre de 2021, deberá continuar pagando a la actora una mesada pensional de un salario mínimo mensual legal vigente, sin perjuicio de los incrementos legales e incluida la mesada adicional de diciembre de cada año.

AUTORIZÓ realizar los respectivos descuentos en salud del retroactivo reconocido y que hacia futuro se sigan realizando dichos descuentos.

CONDENÓ a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la demandante los intereses moratorios a partir del 15 de febrero de 2021, y hasta el momento del pago efectivo. Argumentando que se tomó como fecha de inicio de los intereses, los 2 meses siguientes al auto admisorio de la demanda, toda vez que se no se acreditó por la parte actora, la fecha en que se elevó la solicitud a la accionada.

DECLARÓ no probada la excepción de prescripción.

Y, **CONDENÓ** en costas a PORVENIR S.A.

- **APELACIÓN:**

✓ PORVENIR S.A.:

La anterior decisión fue recurrida por la apoderada de PORVENIR S.A., quien expuso que no se cumplió con la dependencia económica de la demandante frente a su hijo, a raíz de que la investigación administrativa interna realizada por la accionada, demostró que, para la fecha del fallecimiento esta contaba con ingresos propios que le permitían solventar su propia subsistencia, pues contrario a lo manifestado por el juez la actora no tuvo variaciones en sus condiciones de vida, pues si bien se trasladó de su lugar de vivienda, los motivos de éstos no fueron probados dentro del proceso, además contaba con un establecimiento de comercio a su nombre, y figura como beneficiaria en salud de su hija ALEJANDRA MOLINA. Que el causante cotizaba sobre un salario mínimo, y por ende no tiene como certificar otros ingresos. Y que no se puede condenar a intereses moratorios, ya que no se encuentra en mora alguna y además adelantó de manera diligente las investigaciones respectivas.

- **ALEGATOS:**

Una vez transcurrido el término para presentar alegatos, ninguna de las partes hizo uso del mismo.

CONSIDERACIONES:

Antes de resolver los problemas jurídicos, es necesario hacer un breve recuento de las pruebas anexadas por las partes:

- Registro civil de nacimiento de JUAN SEBASTIAN MOLINA GRANDA, en donde se corrobora que la madre es la demandante, la señora MARTA JANNETH GRANDA LÓPEZ.¹
- Registro civil de defunción, en donde se certifica que el señor JUAN SEBASTIAN MOLINA GRANDA, falleció el 26 de octubre de 2018.²
- Documento expedido por la entidad accionada el 2 de mayo de 2019, donde se le niega la pensión de sobrevivientes al señor LUÍS FERNANDO MOLINA VÁSQUEZ.³
- Certificación expedida por la entidad ADRES, en donde la señora MARTA JANNETH GRANDA, figura como beneficiaria en salud de la cotizante ALEJANDRA MOLINA GRANDA.⁴
- Documento incorporado en el PDF 14 del expediente digitalizado, por medio del cual el señor LUÍS FERNANDO MOLINA VÁSQUEZ, manifiesta que no está interesado en presentar demanda, por cuanto no cumple con los requisitos de ley para ser beneficiario de la pretensión que reclama la demandante, por no depender de su hijo.

Conforme a lo anterior, los **problemas jurídicos** se centrarán en establecer: **i)** si la demandante acredita la calidad de beneficiaria con ocasión del fallecimiento su hijo JUAN SEBASTIAN MOLINA GRANDA, por depender económicamente de este; y de salir avante dicha pretensión, se analizará **ii)** si es procedente la condena por intereses moratorios.

¹ Folio 7 de los anexos de la demanda digitalizada

² Folio 9

³ Folios 56 y 57 de la contestación digitalizada

⁴ Folios 58 a 65

i. Dependencia económica de la demandante frente al hijo.

Atendiendo a la fecha de fallecimiento del afiliado fallecido, la normatividad aplicable al caso es la consagrada en el artículo 74 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, el cual exige que, a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste; así mismo, indica el artículo 73 de la ley 100 de 1993, que remite al artículo 46 ibídem, el cual fue modificado por el artículo 12 de la ley 797 de 2003, que el afiliado fallecido debió haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la muerte.

En el caso objeto de estudio no se discute que el afiliado fallecido dejó causada la pensión por tener el número requerido de semanas, pues cuenta en los 3 años anteriores a su muerte con 150 semanas de cotización, y en toda su vida laboral 489, lo cual se corrobora con la historia laboral aportada de folios 3 a 6 de los anexos de la demanda digitalizada.

En cuanto a la calidad de beneficiaria, si bien el parentesco se encuentra plenamente acreditado con el registro civil de nacimiento, se debe demostrar suficientemente la dependencia económica del asegurado fallecido, que es el tema sobre el cual se circunscribe el problema jurídico principal.

En lo que tiene que ver con la **dependencia económica**, para resolver esta inconformidad, resulta necesario recordar lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia C-111 de 2006, en la que indica que para que sea procedente el reconocimiento de la prestación reclamada, frente a la dependencia económica debe suponerse “... *un criterio de necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte del causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es total y absoluta... Por el contrario, la misma responde a un juicio de autosuficiencia, que, en aras de proteger los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada beneficiario.*”

A efectos de determinar en cada caso particular, si una persona es o no dependiente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido un

conjunto de reglas a partir de la valoración del denominado “*mínimo vital cualitativo*” o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular. Entre estos criterios se pueden señalar, entre muchos otros que *“Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna, el salario mínimo no es determinante de la independencia económica, la independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional, es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes”*.

Igualmente es importante traer a colación el pronunciamiento que frente a la dependencia económica de los padres frente a los hijos hizo la Corte Suprema de Justicia, en sentencia con radicado 46555 del 22 de mayo de 2013, en la que indicó:

“... tratándose de la pensión de sobrevivientes, la dependencia económica de los padres no tiene que ser total, pues así ellos se provean de algún sustento, que no los convierta en autosuficientes, tienen derecho a la garantía pensional cuando fallece el hijo que les brindaba un verdadero apoyo económico, por quedar en imposibilidad de procurarse una vida digna.”

Asimismo, cuando los padres pretendan el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por la muerte de un hijo, frente a la demostración de la dependencia económica del causante al momento del fallecimiento, la Corte Suprema de Justicia ha definido unos criterios en la sentencia SL-5605-2019, que pasan a señalarse:

“La dependencia deber ser:

Cierta y no presunta:

«Se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres».

Regular y periódica

De manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacia el presunto beneficiario;

Significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios

“se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia”.

Descendiendo al **caso de autos**, y analizada la prueba documental en conjunto con las declaraciones recibidas por los testigos, esta Sala extrajo lo siguiente:

En cuando al interrogatorio de parte, lo primero que cabe señalar, es que existe un principio universal, el cual señala que la prueba no puede ser creada por quien la invoca, lo que quiere decir que la demandante no puede crear su propia prueba para luego valerse, sacar provecho o beneficio de la misma, pues es indiscutible no solo la presunción sino la convicción de la existencia de situaciones que afectan su credibilidad e imparcialidad.

Conforme a lo anterior, la demandante manifestó que no trabaja hace 3 o 4 años, y antes realizaba reemplazos en docencia en el Colegio San José de las Vegas, y que también hace 15 o 20 años realizó algunas asesorías con el Sena, las cuales duraron aproximadamente 8 meses. Expresó que se separó del papá de sus 2 hijos aproximadamente hace 25 años, y que era éste quien antes se encargaba de los gastos del hogar. Manifestó que convive actualmente con su hija ALEJANDRA MOLINA, toda vez que no tiene manera de solventar sus gastos, pues era su hijo fallecido JUAN SEBASTIAN MOLINA quien costeara el arriendo, servicios y alimentación. Y que esta afiliada en salud de su hija desde que ésta salió como profesional y la inscribió como beneficiaria.

En cuanto a los testigos, se recibió la declaración de la señora MARÍA EUGENIA TAVERA, quien era vecina de la demandante y la madre del compañero permanente de la hija de la actora, la cual señaló que conoce a la demandante hace 15 o 16 años aproximadamente debido a la relación que sostienen sus hijos, y que tiene conocimiento que era JUAN SEBASTIAN MOLINA quien llevaba las riendas del hogar, y debido al fallecimiento de éste, le tocó irse a vivir a donde su hija ALEJANDRA MOLINA. Y señaló que la demandante ha tenido toda la vida un puesto de copiado en la universidad de Antioquia, pero a raíz de la pandemia no continuó trabajando allí.

Por otro lado, se recibió al testigo JUAN PABLO CASTRO TAVERA, quien es el compañero permanente de la hija de la demandante, la señora ALEJANDRA

MOLINA, el cual señaló que conoce a su suegra hace 18 años, asegurando que JUAN SEBASTIAN MOLINA, era quien pagaba el arriendo, contribuía los servicios, el mantenimiento del vehículo y el mercado. Afirmó que conoce que la demandante no estuvo vinculada a alguna empresa y que desconoce si tiene un negocio de fotocopias. Manifestó que la demandante es beneficiaria en salud de su compañera. Y que ésta se fue a vivir con ellos por la imposibilidad de seguir pagando el apartamento y una vida independiente.

De las anteriores declaraciones, las cuales fueron espontáneas para la Sala, se puede concluir, que existía una dependencia económica de la madre frente a su hijo, ya que es claro que lo que brindaba el afiliado antes de su muerte era periódico, constituyendo un verdadero soporte o sustento económico necesario para subsistir dignamente, y no un simple regalo, atención, o auxilio eventual que realizaba todo buen hijo de familia.

También, quedó probado con los testigos, que la destinación de la ayuda económica del afiliado, estaba encaminada a todos los gastos del hogar como lo era el arriendo, servicios y parte de la alimentación, y pese a que la hija ALEJANDRA MOLINA, tenía a la actora afiliada en salud, esta circunstancia no es un elemento que desvirtuó la dependencia que tenía frente a su hijo JUAN SEBASTIAN MOLINA, así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1340-2022, manifestando *“...la circunstancia de que la demandante se encontrara registrada como beneficiaria de su esposo ante el sistema de seguridad social en salud no comporta, necesariamente, la ausencia de subordinación económica frente al hijo fallecido, dado que la afiliación al sistema general de salud resulta ser una de las múltiples y variadas necesidades básicas que tiene una persona, motivo por el cual la dependencia económica debe ser determinada en razón a la trascendencia del aporte económico brindado por el descendiente en la subsistencia digna de los padres en el caso particular, como lo asentara esta Sala de la Corte en la sentencia SL4217-2018, entre muchas otras.”*; dejando claro, que dicha ayuda entregada por el afiliado fallecido, era ineludible para adquirir una vida digna.

Es necesario señalar que la situación personal de la demandante realmente se vio afectada por la falta del ingreso del hijo fallecido, pues con la prueba testimonial se comprobó que se vio obligada a vivir en la casa de su hija y yerno, quienes son los que le ayudan en la actualidad; lo que permite inferir que el soporte económico que realizaba su hijo era tan trascendental para desencadenar en la imposibilidad de procurarse una vida digna.

Por último, hay que señalar que no existe prueba alguna, que logre determinar que la demandante posee un centro de copiado en la Universidad de Antioquia, con el cual se pueda desacreditar la dependencia económica frente a su hijo fallecido, y del mismo modo, al igual que lo señaló el juez, por el hecho de que el afiliado fallecido cotizara al sistema pensional en cuantía de un salario mínimo, esto no quiere decir que sus ingresos eran por dicha suma, pues con la prueba testimonial se logró acreditar que sus ingresos reales oscilaban entre 3 a 4 millones de pesos a raíz de sus actividades de comerciante.

De acuerdo con las reglas de la sana crítica, la libre formación del convencimiento y la valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el juez tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le brinden convicción. Así pues, en el presente caso, el juez como director del proceso puede apreciar y valorar con un criterio de conciencia cualquier prueba decretada dentro del proceso, como ya se dijo, según las reglas de la sana crítica.

Por todo lo anterior, debe decirse que se logró probar la dependencia económicamente deprecada, por lo que la demandante es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su hijo, como lo indicó el juez, debiéndose **CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia en este sentido.

ii. Intereses moratorios.

En lo que tiene que ver con esta condena, es claro que los intereses fueron creados por la ley 100 de 1993 para resarcir el retardo de la entidad de seguridad social, que estando obligada al pago de las mesadas pensionales de que trata dicha ley, no las cancele de manera oportuna, así lo prevé el artículo 141 de la ley 100 de 1993. Y para esto, la ley estableció un término para darle respuesta a la solicitud elevada por la accionante, la cual se encuentra consagrada en el inciso final del artículo 1° de la ley 717 de 2001, que indica que: *“...el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad correspondiente, deberá a efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario”*.

En este orden de ideas, la mora de la entidad sólo opera luego de pasados dos meses de radicada la solicitud de reconocimiento pensional, con el lleno

de los requisitos, lo cual es apenas lógico, puesto que la entidad, dentro de tal plazo y una vez presentada la solicitud de la pensión por parte del beneficiario, previo al reconocimiento del derecho, debe entrar a corroborar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por la normatividad aplicable.

Es necesario señalar que, si bien en ciertos casos no es dable imponer intereses moratorios, esto no está sometido a un análisis de la conducta de la entidad y su posible apego a los supuestos de la buena fe, sino a situaciones excepcionales y puntuales como lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3785-2020, en donde indicó que *“...la Corte también ha reconocido que existen algunos escenarios excepcionales y muy precisos en los que no se puede asumir que la entidad administradora de pensiones esté en mora de pagar las prestaciones que están a su cargo, bien porque actúa con apego al ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas (ver CSJ SL6326-2016, CSJ SL8552-2016, CSJ SL4948-2017, CSJ SL072-2018 y CSJ SL984-2019) o porque existe algún conflicto entre potenciales beneficiarios de la pensión, que solo puede ser dirimido por la justicia ordinaria (CSJ SL704-2013, CSJ SL13369-2014, CSJ SL14528-2014, CSJ SL11940-2017, CSJ SL1354-2019 y CSJ SL2239-2019, entre otras)”*; de acuerdo a ello, debe indicarse que en el caso objeto de estudio no se presenta ninguna de las anteriores figuras, por tal razón, son procedentes los mismos.

En el caso objeto de estudio, no hay duda que PORVENIR S.A. incurrió en mora en el pago de las mesadas pensionales adeudadas a la demandante, toda vez que, sí existía una dependencia económica de la demandante frente al afiliado fallecido, y los argumentos presentados en el documento que niega tal reconocimiento no son del resorte para justificar el no reconocimiento de la prestación económica, y aunado a que no se allegó la investigación administrativa correspondiente para estos casos.

Así las cosas, no existiendo inconformidad en lo que respecta a la fecha en que deben correr los intereses moratorios, los mismos deberán ser liquidados desde el 15 de febrero de 2021, esto es, 2 meses después del auto admisorio de la demanda, es decir, 14 de diciembre de 2020, tal y como lo explicó el juez en su parte motiva, y hasta el momento en que se haga efectivo el pago sobre la suma adeudada por concepto de mesadas pensionales.

Los mismos se liquidan al momento del pago de las mesadas pensionales atrasadas, con la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en

que se efectuó el pago, por lo tanto, para estimar el valor de los intereses debe tenerse en cuenta cada una de las mesadas adeudadas desde la fecha de su exigibilidad, liquidando mes a mes hasta la fecha del pago. Así las cosas, la sentencia de la primera instancia merece ser **CONFIRMADA** en tal sentido.

Corolario de lo anterior, la sala concluye que la sentencia que se revisa por vía de apelación merece ser **CONFIRMADA**.

Las costas procesales de la primera instancia como lo dijo la juez. Las de la segunda instancia son a cargo de PORVENIR S.A. por no salir adelante el recurso de apelación. Las agencias en derecho de la segunda instancia se tasan en la suma de \$1.000.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia revisada por vía de apelación, de fecha y procedencia conocidas.

SEGUNDO: Costas y agencias en derecho como se dejó dicho en la parte motiva de esta sentencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,


GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Marta Janneth Granda López
DEMANDADO	Porvenir S.A.
RADICADO	05-001-31-05- 002-2020-00096
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 19 de agosto de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 19 de agosto de 2022 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO